Reseña

Michele Goodwin. *Policing the Womb. Invisible Women and the Criminalization of Motherhood*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. US\$29,99 (ISBN: 9781107030176), 323 pp.

Michelle Sadler

Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

*P*olicing the Womb narra la perturbadora e inquietante historia de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Se trata de una historia de vigilancia policial del útero —ejercida a través de la ley, la medicina, los medios, las convenciones sociales—, que deriva en la criminalización de las mujeres cuando se considera que se alejan de los cánones de la ‘adecuada’ maternidad. Esta vigilancia y criminalización se ejecutan además sobre mujeres invisibles, que rara vez ocupan los titulares, usualmente pertenecientes a los sectores más vulnerados de la sociedad.

El texto combina la experticia legal de la autora con su formación en antropología y sociología, entregando una detallada descripción de la legislación, junto al protagonismo de las historias encarnadas de mujeres, y develando las graves secuelas que deja la criminalización de sus actos en sus vidas y en las de sus familias. Goodwin busca llevar el análisis más allá del aborto —que ha sido foco de gran parte de la agenda de derechos reproductivos—, para centrarse en la protección de la libertad y la dignidad de las mujeres que quieren cursar sus gestaciones y ejercer su maternidad. De esta forma, nos invita a mirar el espectro de decisiones reproductivas a las que las mujeres se enfrentan y que pueden ser sujetas al poder del Estado.

La vigilancia sobre el útero ha ido en creciente aumento en Estados Unidos durante las últimas décadas. Si en 1986 ningún estado contaba

con leyes contra el feticidio, en la actualidad son 38 los que las han implementado. Entre 2010 y 2015 se propusieron y aprobaron más regulaciones para restringir el acceso al aborto y a métodos anticonceptivos que en las tres décadas precedentes. Y solo en la primera mitad de 2019 se propusieron cerca de 400 leyes antiaborto en el país y más de una docena de estados se encontraban debatiendo legislaciones que otorgarían derechos constitucionales a los fetos. Esta arremetida conservadora ha sido influida por el nacimiento y ascenso del Tea Party durante la última década, y se fortaleció durante el mandato republicano de Donald Trump.

Haciendo comparaciones con *Frankenstein* de Mary Shelley o *The Handmaid's Tale* de Margaret Atwood, Goodwin describe el caso de Marlise Muñoz, quien en 2014 sufrió una embolia pulmonar que desembocó en su muerte cerebral, mientras cursaba una gestación de 14 semanas. A su familia se le negó la solicitud de desconectarla del soporte vital y su cuerpo se mantuvo funcionando mecánicamente mientras se descomponía en un hospital de Texas; la ley determinó que sus órganos debían seguir funcionando para mantener vivo al feto. Tras 62 días y una mediática batalla legal interpuesta por la familia, fue desconectada. En este caso, plantea la autora, el hospital sirvió como un agente del estado de Texas, con poder para ignorar las órdenes de no resucitar y de testamentos en vida, solo en los casos en que la paciente está embarazada.

En el caso anterior, mediante las leyes de protección fetal, los deseos de Marlise fueron ignorados tras su muerte y su cuerpo físico fue utilizado como incubadora para un feto demasiado pequeño para sobrevivir por sí solo. Son cerca de 36 los estados en que se prohíbe remover el soporte mecánico de mujeres con muerte cerebral en caso de estar embarazadas. Y si bien los casos de muerte cerebral no son numerosos, sí lo son los de mujeres cuyas conductas durante la gestación son consideradas de riesgo para la salud del feto, y que llevan a que sean catalogadas y perseguidas como 'malas madres'. Un ejemplo es el de Christine Taylor, mujer de 22 años que en 2012 fue arrestada tras caer por las escaleras de su casa de Iowa, estando embarazada. Al acudir al centro médico, confidenció al personal de salud que se sentía insegura y vulnerable, que estaba pasando por un mal momento de pareja, que había dudado de su capacidad para sostener a un tercer hijo. Al volver a casa fue arrestada por intento de feticidio, tras haber sido denunciada a la policía por el

equipo médico que la había atendido. Luego de tres semanas de investigación, el caso fue sobreseído. Otro caso es el de Lisa Epstein, en 2013, en Tampa, quien le comunicó a su obstetra que deseaba esperar dos días adicionales a la indicación de cesárea, y recibió como respuesta la amenaza de denunciarla y de obligarla a someterse a una cesárea en contra de su voluntad. Buscó apoyo legal de inmediato y tuvo un parto vaginal con otro equipo médico.

En estos dos últimos casos, las mujeres no llegaron a cursar condenas, pero lamentablemente son miles las que sí las cursan. En especial cuando la conducta considerada abyecta se vincula con el consumo de drogas. Desde 1973, las autoridades en al menos 45 estados han procesado penalmente a mujeres por exponer a sus fetos a drogas. Un ejemplo es el ocurrido en Carolina del Sur en 1999: Regina McKnight, joven afrodescendiente que vivía en situación de calle, fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio —de los cuales cumplió 12—, tras dar a luz a un bebé muerto. A Regina no se le ofreció apoyo de salud mental ni de drogas antes de su arresto. El jurado aceptó la acusación de que el consumo de cocaína causó la muerte fetal, a pesar de que importantes asociaciones médicas concluyeron que no había evidencia para dicha asociación. Goodwin alerta que este tipo de condenas sirvió para politizar los embarazos, vinculando la gestación con los esfuerzos federales para demostrar la dureza en los delitos de drogas. La conducta durante el embarazo se estableció como terreno para la intervención del derecho penal, contribuyendo a la normalización de la participación policial y fiscal en la salud reproductiva de las mujeres.

En caso de superarse la prueba de evitar conductas ‘inapropiadas’ durante el embarazo, la vigilancia continúa, escudriñando en las formas en que se ejerce la maternidad. Pero, insiste la autora, especialmente en mujeres afrodescendientes y/o de sectores marginales de la sociedad. Es así como las mujeres afro son reportadas diez veces más a menudo que las blancas a servicios de protección social de la infancia. En 2014, una mujer fue arrestada en California del Sur por ‘abandonar’ a su hija de 9 años, a quien permitió jugar en el parque cerca de su trabajo mientras ella se encontraba en su jornada laboral. En Estados Unidos, una de cada 18 mujeres afrodescendientes será encarcelada alguna vez durante su vida. En el país, hay más mujeres en cárceles que en ninguna otra nación del mundo, concentrando casi un tercio de las mujeres encarceladas a nivel global.

El texto abunda en ejemplos como los anteriores, de mujeres perseguidas, encarceladas y señaladas como negligentes por no responder a los estereotipos de la buena madre. Ello, en el contexto de que en cada vez más estados se prohíbe la educación sexual en las escuelas y/o se permite solo la educación en abstinencia sexual, se restringe el acceso a métodos anticonceptivos y a aborto. Los defensores de estas medidas afirman que la vigilancia de mujeres y niñas busca proteger su seguridad y salud, pero los datos muestran exactamente lo contrario. Los estados con leyes más conservadoras en estas materias presentan los peores indicadores de salud materna. A modo de ejemplo, Texas tiene las leyes más restrictivas sobre aborto y es a la vez el estado que presenta la mayor tasa de mortalidad materna no solo del país, sino de todo el mundo desarrollado. A nivel país, Estados Unidos presenta las tasas más altas de mortalidad materna y de infecciones de transmisión sexual de entre las naciones desarrolladas.

Si bien *Policing the Womb* se aboca a describir la situación en Estados Unidos, no es difícil llevar la misma reflexión al contexto latinoamericano. Entre los casos más mediáticos de los últimos años, podemos mencionar el de Adelir Carmen Lemos de Góes, quien en 2014 fue sometida mediante orden judicial a una cesárea forzada en Brasil. En Chile, en 2017 una pareja fue formalizada por infanticidio tras la muerte del recién nacido en un parto en casa; en 2019, un hospital elevó un recurso de protección en fiscalía para obligar a una mujer a dar a luz en un hospital regional de alta complejidad, a pesar de que no presentaba factores de riesgo y de que deseaba parir en el hospital de su comunidad (que además contaba con la infraestructura y personal médico necesarios para atenderla). La amenaza no llegó a concretarse debido a la movilización de la comunidad y de organizaciones de derechos humanos. El mismo año tuvimos noticia de una mujer que fue trasladada por personal de salud en trabajo de parto desde su casa a un hospital para impedir que completara el parto en su hogar, bajo la amenaza de acciones legales contra ella si no lo hacía.

En forma similar a los casos que nos presenta Goodwin, en Chile la vigilancia policial y legal sobre la conducta materna también se ejerce durante la crianza, en especial sobre mujeres indígenas, migrantes y pobres. Es el caso de Gabriela Blas, mujer aymara que en 2010 fue condenada y cumplió prisión por abandono de menores que resultó en muer-

te. Gabriela dejó a su hijo de tres años en el altiplano mientras corría a buscar a dos animales que se habían perdido mientras pastoreaba; el niño se perdió y fue encontrado muerto meses más tarde. Joane Florvil, mujer haitiana, fue encarcelada en 2017 por abandono de menores tras dejar unos minutos a su bebé con un guardia de la municipalidad de Lo Prado mientras corría a buscar a algún compatriota que la ayudara a comunicarse. Se había acercado desesperada a buscar ayuda, pues a su pareja le habían robado sus documentos. Joane fue encarcelada y murió en confusas circunstancias —por supuestos problemas de salud— mientras estaba privada de libertad. En estos dos casos, historias de infortunio en situaciones de emergencia fueron interpretadas como la materialización de maternidades negligentes (Sadler y Carreño 2020).

Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esta vigilancia? ¿A qué problemáticas nos enfrenta? En el juicio de Regina McKnight, se le acusó de tener un ‘corazón depravado’; en el de Gabriela Blas, se dijo que sus actos atentaron ‘contra las leyes de la naturaleza’, desafiando los roles asociados al ‘contenido genético y biológico de una madre’. Sus subjetividades maternas (cuando se probaron en contextos públicos y políticos) entraron en el espacio de lo impensable, de lo intolerable, de un desempeño de la maternidad menos que aceptable.

Goodwin, no en vano, titula el libro como *Policing the Womb*, aludiendo a la vigilancia policial a que se somete el campo reproductivo femenino. Nos recuerda la ‘lógica policial’ como es descrita por el filósofo Jacques Rancière: los procesos mediante los cuales se organizan los poderes y se distribuyen los lugares y las funciones sociales, así como los mecanismos de legitimación de esa organización y distribución (Rancière 1996). En estos procesos, las instituciones de salud han ido jugando un creciente y central rol de vigilancia de la conducta materna, en línea con lo que Blázquez y Montes (2010) identifican como la ‘maternalización de las madres’: la incorporación durante el siglo XX de una ideología instructiva que enseña a las mujeres a desarrollar comportamientos y conocimientos técnicos sobre el ejercicio exitoso de la maternidad, avanzado principalmente por las instituciones de salud. Siguiendo a Smart (1996), estas reglas pueden verse en términos foucaultianos como las calibraciones de la buena maternidad. Inicialmente cubrieron asuntos físicos de dieta, calor, ambiente inmediato y desarrollo físico. Más tarde, estas calibraciones se ampliaron para incluir el inmenso ámbito de la atención

psicológica y de la crianza del niño. Por lo tanto, la madre sería inadecuada si no ama y no expresa este amor ‘adecuadamente’, es decir, en base a los estándares de ciertas prácticas de cuidado y crianza hegemónicas de sociedades occidentales modernas (Morelli et al. 2018).

Al delatar a las mujeres y pasar a llevar el principio ético de confidencialidad médica, la relación médico-paciente sufre un profundo deterioro, plantea Goodwin. Se altera la noción de que el cuidado médico privilegia la seguridad y confidencialidad de la usuaria y, al instalarse la desconfianza, se pone en jaque la adherencia a la atención, poniendo así en riesgo la salud de mujeres y recién nacidos. Además, queda al descubierto que cuando se trata de mujeres que pertenecen a segmentos vulnerados de la población, en la toma de decisiones médicas los estereotipos negativos asociados a lo femenino y a la maternidad operan en toda su extensión.

Las implicancias sociales de la persecución y de las sentencias —exageradas para el tipo de ofensas del que se las acusa— son pocas veces discutidas, y se extienden a los hijos e hijas de esas mujeres, a sus familias y comunidades. Entonces, en muchos casos sus hijos e hijas deben crecer en los precarios servicios de protección social, alejados de la relación con sus madres, a la vez que las mujeres son expuestas a la vergüenza, el estigma y la indignidad de la exhibición pública, con un currículum manchado que impactará negativamente en sus oportunidades durante el resto de sus vidas.

Es sencillo, además, individualizar la negligencia en la conducta reproachable de Christine, Lisa, Regina, Gabriela, Flor, o tantas otras, sin problematizar las condiciones en las que viven y en las que sus posibilidades de elección se ven restringidas. Las condiciones de vida precarias, la falta de acceso a educación sexual, a métodos anticonceptivos, a aborto legal y seguro, a servicios sociales de apoyo a la crianza, entre muchos otros factores, hacen que la maternidad deseada y ‘responsable’ sea el privilegio de pocas. Es por ello que Goodwin plantea que el análisis de este problema requiere no solo de un marco de derechos reproductivos, sino de uno de justicia reproductiva, que implica comprender que la vigilancia a la que se someten las mujeres no sucede en forma aislada de instituciones sociales, políticas, culturales y económicas (Ross y Solinger 2017). Dicho marco implica visibilizar los prejuicios raciales, de género y clase que se presentan en la legislación, y que niegan a las personas el

derecho a ejercer control de sus cuerpos y de sus decisiones reproductivas. Ello, en especial a las mujeres, pues los marcos legales que las criminalizan suelen basarse en supuestos tradicionales sobre sus obligaciones 'naturales' o en sus usos instrumentales como madres.

Asimismo, un enfoque de justicia reproductiva demanda que se mire a las mujeres en un sentido integral, relevando que sus derechos reproductivos van más allá de los embarazos o hijos que tengan. Agrego que el concepto de gobernanza reproductiva también es de utilidad para este análisis. Este refiere a los mecanismos a través de los cuales diferentes configuraciones históricas de actores utilizan herramientas legislativas, incentivos económicos, mandatos morales, coerción e incitaciones éticas para producir, monitorear y controlar los comportamientos reproductivos de la población (Morgan y Roberts 2012). Morgan y Roberts alertan que la gobernanza reproductiva está experimentando una transformación dramática en América Latina, a medida que las políticas públicas están siendo influidas por regímenes morales conservadores.

Policing the Womb nos recuerda que el control de la salud reproductiva va mucho más allá de una preocupación por la salud de la población y que más bien ha servido históricamente para enmascarar otros intereses políticamente convenientes: controlar a las mujeres y exigir su obediencia, aleccionar, complacer las estrategias instaladas contra las drogas y el crimen, y aumentar el pánico moral ante conductas y grupos considerados peligrosos. Nos recuerda también que, si bien aquellas que han nacido en los estratos marginales de lo social se ven expuestas a una injusticia exacerbada, ninguna mujer está libre de esta vigilancia y persecución legal y criminal.

Es motivo de gran preocupación cuando una sociedad abandona su brújula moral, pierde de vista la dignidad de los demás y vuelve invisible a la mitad de su población, concluye la autora. No puedo sino compartir dicha preocupación e invitar a la lectura de *Policing the Womb*.

Bibliografía

- Blázquez, M. y Montes, M.J. 2010. Emociones ante la maternidad: de los modelos impuestos a las contestaciones de las mujeres. *Ankulegi* 14, 81-92.
- Morelli, G., Quinn, N., Chaudhary, N. et al. 2018. Ethical Challenges of Parenting Interventions in Low to Middle Income Countries. *Journal of Cross Cultural Psychology* 49(1), 5-24. DOI: 10.1177/0022022117746241.

- Morgan, L.M. y Roberts, E.F. 2012. Reproductive Governance in Latin America. *Anthropology & Medicine* 19(2), 241-254. DOI: 10.1080/13648470.2012.675046.
- Rancire, J. 1996. *El desacuerdo*. Buenos Aires: Nueva Visin.
- Ross, L. y Solinger, R. 2017. *Reproductive Justice, an Introduction*. Berkeley, CA: University of California Press, 2017.
- Sadler, M. y Carreo, A. 2020. Distressed Caregivers or Criminals? Stories of Precarity and Perceived Maternal Neglect in Chile (127-138). En Martin, B. y Parr, M. (eds.), *Writing Mothers: Narrative Acts of Care, Redemption, and Transformation*. Ontario: Demeter Press. DOI: 10.2307/j.ctv103xdp2.11.
- Smart, C. 1996. Deconstructing Motherhood. Good enough Mothering? (37-57). En Silva, E.B. (ed.), *Feminist Perspectives on Lone Motherhood*. London: Routledge. *EP*